

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en el proceso ordinario laboral promovido por JHON ENRIQUE ZAPATA GONZÁLEZ en contra de la sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (Radicado 05001-31-05-011-2017-00163-01).

ANTECEDENTES

El demandante pretende, previo a las declaraciones que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 13 de enero de 1992 hasta el 4 de diciembre de 2015, que se declare ineficaz o nulo el despido del que fue objeto por encontrarse en estado de debilidad manifiesta y, en consecuencia, se condene a la demandada a reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o a uno superior; al pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social entre la fecha del despido y la fecha del reintegro; a la indexación de las sumas de dinero fruto de la condena; y al pago de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las costas del proceso.

Como hechos relevantes de sus súplicas narró que laboró para la sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P. desde el 13 de enero de 1992, y luego por sustitución patronal pasó a laborar para la accionada desde el 1° de julio de 2006; el último cargo fue el de auxiliar de tecnología; durante la vigencia de la relación laboral nunca fue objeto de sanción disciplinaria o llamado de atención; el 4 de diciembre de 2015, el director de relaciones laborales de la compañía, le entregó comunicación en la cual la empresa decidió dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa; el salario para la fecha del despido era de \$1.811.388; desde el año 1996 viene consultando ante la entidad que administra el Plan Obligatorio de Salud de la accionada, Empresa Adaptada en Salud (EAS) Unidad Médica de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Unidad Departamento Médico, por episodios catalogados por los médicos tratantes como trastornos esquizofrénicos de carácter afectivo, trastornos depresivos mayores y deterioro cognitivo leve tipo disejecutivo, según calificación médico que adjunta; la última médica siquiátra que lo trató por parte de la (EAS), diagnosticó lo siguiente: Paciente con antecedentes de enfermedad mental de varios años de evolución; que ha atendido de manera constante y regular; que ha tenido adherencia 100% al tratamiento farmacológico, como a las recomendaciones dadas en la consulta; ha respondido de manera favorable el esquema de tratamiento instaurado, la condición de su enfermedad mental es crónica, NO CURABLE por lo cual debe estar en tratamiento indefinido tanto en medicación como en los controles por consulta advirtiendo que la continuidad en el manejo de su enfermedad mental implicaría un incremento significativo en posibles recaídas y reactivación sintomática; los medicamentos que permanente debe consumir son: Respiridona (una diaria); Acido Valproico (cinco diarias) y fluoxetina (5 milímetros diarios), a lo que se suma que tiene riesgos cardiovasculares; el 15 de diciembre de 2006, sufrió un accidente de trabajo, en el cual se fracturó tres vertebras, como consecuencia se le implantó una platina en la columna, lo que aparejó secuelas y ocasionó una serie de restricciones médicas; tiene una hija de 10 años, quien padece de tumor de Wings (cáncer de riñón), el que viene siendo tratado por nefrólogo

a través de quimioterapia y con ecografías y exámenes urinarios, hija que depende económicamente de él; luego de ser despedido interpuso acción de tutela para obtener su reintegro laboral, la que mediante sentencia del 5 de abril de 2016 se le denegó el amparo, por considerar que existía otro medio de defensa judicial; ha venido padeciendo graves trastornos psicológicos con ocasión de su padecimiento de salud, situación que ha agravado aún más su deteriorada situación; solicitó mediante derecho de petición su reintegro laboral, el que le fue negado por la accionada.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., dio respuesta en forma oportuna al libelo oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Dijo que eran ciertos los hechos referentes a los extremos laborales teniendo en cuenta la sustitución patronal, el salario devengado y el cargo ocupado. Negó el que hace referencia al accidente de trabajo. Sobre los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y compensación.

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 23 de marzo de 2022, absolvió a la entidad demandada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por el señor JHON ENRIQUE ZAPATA GONZÁLEZ, a quien le impuso las costas. Como agencias en derecho señaló la suma de \$500.000.

La Sala conoce del asunto por el recurso de apelación que fue interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte demandante, a quien le fue concedido. Como argumentos expone que el señor Zapata González ha venido sufriendo varias patologías de origen mental desde hace más de 20 años, que lo conllevaron incluso a estar 2 meses internado en SAMEIN, de lo que se dieron cuenta sus jefes, quienes llamaban a la hermana del demandante para preguntar por su estado de salud. Refiere que éste si contaba con una restricción médica, que llevó incluso a que se le cambiara su trabajo habitual en alturas para reasignarlo a supervisión de otros

compañeros de los servicios que presta UNE, restricción que estuvo vigente hasta la finalización del contrato, por lo que no resulta cierto que haya finalizado el contrato de trabajo en condiciones normales, por cuanto en el interrogatorio señaló el actor que no se sentía bien, que había veces que no se quería levantar a realizar sus funciones, por lo que el interrogatorio debe ser valorado en conjunto. Refiere que el Departamento de Salud Ocupacional de la demandada tenía conocimiento de los padecimientos de tipo mental que por más de 20 años venía sufriendo. Indica que la demandada no probó que el despido del accionante nada tenía que ver con su condición médica, y al ser terminado el contrato de trabajo sin justa causa, con mayor razón opera la presunción de que el despido fue por las patologías sufridas por el demandante. Señala frente al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que el mismo no tiene coherencia en la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, por cuanto se definió una semana después de la terminación del contrato de trabajo, dado que la historia clínica muestra unos padecimientos mentales por más de 20 años, además tuvo un accidente importante en el año 2006, de donde no tiene razón que la estructuración se haya definido en diciembre del año 2015, sin que se haya tenido la oportunidad de contradecir ese dictamen por la negación del despacho dada una mala interpretación de la norma aplicable, por lo que si el Tribunal Superior considera que la fecha de estructuración no es coherente podría decretar la comparecencia del perito para que lo sustente, por cuanto la misma fue oportunamente pedida y no concedida, con el fin de que lo aclare, teniendo en cuenta que existe otro peritazgo donde se define como fecha de estructuración el año 2009, seis años antes de la cancelación del contrato de trabajo, lo que representa una diferencia muy grande entre dichos peritazgo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por el apoderado recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

En esta instancia no existe discusión respecto a que entre las partes se celebró un contrato a término indefinido, el cual se desarrolló entre el 13 de enero de 1992 hasta el 4 de diciembre de 2015. Tampoco se discute que el último cargo desempeñado fue el de Auxiliar de Tecnología, con un salario de \$1.811.388 mensuales, y que el contrato de trabajo finalizó sin justa causa con el pago de la correspondiente indemnización.

Con esa base, el problema jurídico que compete a esta Sala de Decisión resolver, consiste en establecer si para la finalización del contrato que existió entre las partes que integran este litigio, el demandante era o no beneficiario de la estabilidad laboral reforzada prevista en la Ley 361 de 1997, y en caso de una respuesta afirmativa, se entrarán a definir las consecuencias legales de ello.

Para dar inicio al asunto de debate, debe tenerse en cuenta que el actor suscribió con las Empresas Públicas de Medellín un contrato de trabajo a término indefinido el 9 de enero de 1992, en el cargo de “*Ayudante Control Servicios*”, contrato que fue sustituido por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. a partir del 1º de julio de 2006, contrato que fue modificado mediante otro si, con el fin de “*...realizar el ascenso del funcionario al cargo **AUXILIAR TECNOLOGÍA**...*”, adscrito a la “*SUBDIRECCIÓN OPERACIÓN CLIENTES NOROCCIDENTE u OTRAS SUBDIRECCIONES...*”, a partir del 7 de noviembre de 2013, con un salario inicial de \$1.670.022, “*...pagado de conformidad con el sistema y la periodicidad establecida por el EMPLEADOR...*”

De igual manera, obra en el expediente la comunicación fechada el 4 de diciembre de 2015, mediante la cual la sociedad demandada le da por finalizado el contrato de trabajo al demandante, indicándole textualmente lo siguiente:

“La presente tiene por objeto comunicar a usted que UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ha decidido, con base en la facultad que le confiere el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa mediante el pago de la indemnización convencional, a partir de la entrega de la presente comunicación, estableciendo como último día laborado el día 4 de diciembre de 2015.

En la Vicepresidencia de Gestión Humana podrá reclamar la liquidación final de prestaciones sociales en la cual se incluirá la correspondiente indemnización por despido, la autorización para examen médico de retiro, la autorización para el retiro de cesantías y copia de los comprobantes de pago de cotizaciones a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos tres meses de su vinculación laboral con la empresa, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002”.

Ahora bien, la parte actora arguye como elemento de convicción para que se le reconozca la pretensión del reintegro el que, para la data del finiquito contractual, se encontraba cobijado por la estabilidad laboral reforzada, en tanto venía padeciendo patologías referentes a salud mental desde hacía aproximadamente 20 años.

Al respecto, debe señalarse que los requisitos que deben reunirse para que por vía judicial se ordene el reintegro por fuero de salud previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 según la jurisprudencia y el criterio de esta Sala de Decisión son: (i) que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades - hecho que se constata al momento de la terminación del contrato-; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente

para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación (al respecto pueden consultarse las sentencias SL1360 y SL3520 de 2018, SL260 y SL2548 de 2019, SL635 de 2020, SL1236 de 2021, SU 049 de 2017, T-305 de 2018, SU-040 de 2018, T-102 de 2020, T-434 de 2020, T-237 de 2021 y SU087 de 2022).

En las mencionadas providencias, la Corte Constitucional ha explicado cada uno de los requisitos aludidos; frente al **primero** expresó que se han enlistado algunas reglas de las que es posible identificar los eventos donde opera la garantía de estabilidad laboral reforzada por la condición de salud que impide significativamente el normal desempeño de la labor, y estas son:

“(a) En el examen médico de retiro se advierte sobre la enfermedad, al momento del despido existen recomendaciones médicas, y se presentó incapacidad médica durante días antes del despido.

(b) Existe incapacidad médica de varios días vigente al momento de la terminación de la relación laboral.

(c) Se presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico.

(d) Existe el diagnóstico médico de una enfermedad efectuado durante el último mes del despido, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) tiene lugar antes del despido”.

Frente al **segundo requisito**, la alta Corporación indicó que en el caso que un trabajador desea invocar los beneficios de la estabilidad laboral reforzada, debe demostrar que el empleador conocía de su condición de salud antes de darse la terminación del contrato de trabajo.

Y en lo que tiene que ver con el **tercer presupuesto**, el precedente judicial vinculante ha dicho que existe una presunción legal (iuris tantum) en favor de la persona desvinculada, pues si se constata que el trabajador presenta una condición de debilidad especial y que la terminación del vínculo se

produjo sin la autorización de la autoridad laboral, entonces se deberá presumir que la causa fue el estado de indefensión en el que permanece el sujeto, correspondiéndole al empleador acreditar que el despido no se dio con ocasión de esta circunstancia particular, sino que obedeció a una causal objetiva.

Teniendo en cuenta estas orientaciones jurídicas, se descende al caso concreto, encontrando en el material probatorio un historial clínico desde el 19 de noviembre del año 1996, que evidencia que el demandante presentaba como patología “*crisis de ansiedad*”, más adelante con fecha del 12/07/99 aparece registro de “*+ nervioso desde hace 2 meses*”, describiendo como factor estresante “*1 intento de robo 2 presencia como algo sospechoso con tipo que llegara a su casa 3 En partido de fútbol (ilegible) se asusta*”, y así varias consultas médicas periódicas que dan cuenta de la patología del actor y, que a su vez, se van agregando nuevos factores estresantes que van afectando su salud mental.

De igual manera, aparecen registros de historia clínica de la Psiquiatra Isabel Zuluaga a partir del 3 de septiembre de 2012, y una “CONSTANCIA ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA DE PSIQUIATRIA”, suscrita por la misma doctora Zuluaga Sánchez el 14 de diciembre de 2015 en la que de manera textual indicó sobre el señor Jhon Enrique Zapata González:

“Paciente masculino, 46 años. Tiene antecedentes de enfermedad mental de varios años de evolución. Yo lo atiendo desde septiembre de 2012. Durante estos tres años el paciente ha asistido de manera constante y regular a los controles y ha tenido adherencia 100% al tratamiento tanto farmacológico como a las recomendaciones dada en la consulta. Es un hombre funcional quien ha respondido de manera favorable al esquema de tratamiento instaurado. Sin embargo, su condición es una enfermedad mental crónica, no curable para la cual debe estar en tratamiento indefinido tanto con medicación como con los controles por consulta externa. La no continuidad en el manejo lleva a un incremento significativo en las posibilidades de recaídas y reactivación sintomática”.

Así mismo, aparece el “*CERTIFICADO MÉDICO DE EGRESO*” del demandante, fechado el 11 de diciembre de 2015 por “*COLMEDICOS LA SALUD DE SU EMPRESA*”, en el que referencian como recomendaciones generales, entre otras, la de “*4. Continuar en la EPS el plan de tratamiento de su patología de la esfera mental. Esta recomendación no está relacionada con limitaciones o restricciones para el desempeño de su trabajo habitual y hace parte de los mecanismos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad*”.

Aparece igualmente en el plenario, una certificación de la Vicepresidencia de Gestión Humana frente a las incapacidades que le fueron dadas al señor Jhon Enrique Zapata González a partir del 21 de agosto de 2012 y hasta el 30 de septiembre de 2015, teniendo diferentes diagnósticos, sin que dentro de ellos se avizore que alguno haya tenido relación con su salud mental, pues aparecen registros como “Contusión del tórax”, “Artritis, no específico” y otras, siendo la última de ellas entre el 29 y 30 de septiembre de 2015 por “Fiebre, no específico”.

La Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia adelantó un dictamen de pérdida de capacidad labora al señor Jhon Enrique Zapata González el “08/04/2019”, a solicitud del abogado Santiago Tirado Uribe, en la que como patologías se tuvieron en cuenta el trastorno esquizo afectivo, trastorno afectivo bipolar, secuelas de traumatismo especificados de la cabeza y fractura de vértebras cervicales especificadas (artrodesis C2-C5), en el que se determinó como pérdida de capacidad laboral el 51.60%, de origen común y con fecha de estructuración el “10/11/2009 EVALUACIÓN PSIQUIATRIA HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (HPTU)”

Como archivos anexos a dicho dictamen, aparece registro de la historia clínica del actor en la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, donde relacionan las diferentes consultas que este ha tenido, señalando de manera textual en la llevada a cabo el 19 de febrero de 2016 lo siguiente:

“Enfermedad Actual: PACIENTE MASCULINO DE 46 AÑOS DE EDAD, PRIMERA VEZ EN HOMO, ATENDIDO POR PSIQUIATRIA ANTERIORMENTE. DEBUT DE TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO EN 1996, UNA HOSPITALIZACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR EN SEGUIMIENTO AMBULATORIO CON BUENA RESPUESTA A LA MEDICACIÓN”.

Más adelante continuaron diciendo en el análisis profesional:

“PACIENTE PORTADOR DE DIAGNOSTICOS ANOTADOS DE LARGA DATA CON MUY BUENA RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN ADECUADA CON ESTABILIDAD CLINICA. EN MOMENTO ASINTOMÁTICO...”

A su vez, en la evaluación neuropsicológica realizada por el Hospital Pablo Tobón Uribe, con fecha febrero de 2013, en la que se relaciona como motivo de consulta-historia de la condición actual, lo siguiente:

“A los 37 años de edad tuvo un accidente de tránsito en el que se fracturó tres vértebras y Traumatismo craneoencefálico. Fue atendido en el HUSVP donde estuvo hospitalizado por dos meses aproximadamente. Un mes después volvió a su actividad laboral que es trabajos en altura.

Hace dos meses aproximadamente en evaluación por salud ocupacional en su empresa pusieron restricción para trabajos en altura y lo remitieron a neurología y fue evaluado en EMSA (Dr. Andrés Castaño) el 8 de febrero de 2013 con nota de opinión “No encuentro contraindicación neurológica para desempeñar trabajos en alturas. Tiene secuelas leves de TEC que son de predominio neurocognitivo y que ha permanecido estable sin alterar desempeño en general. Tiene Fx cervical la cual ya fue tratada. Solicito concepto por neurocirugía para diagnóstico final del mismo con respecto a la fractura cervical. Solicito evaluación por neuropsicología (los resultados se evaluarán por psiquiatría). Se da alta por neurología”.

QUEJAS ACTUALES

El paciente no refiere ninguna queja cognitiva, considera que no tiene dificultades y realiza adecuadamente su actividad laboral y académica

Se entrevista a Irma (hermana) quien informa que no le ve dificultades de memoria ni de ningún otro tipo a Jhon Enrique,

considera que su memoria es igual a la de siempre. Siempre le ha ido bien académicamente”.

(...)

RESUMEN

Paciente quien sufrió TEC a los 37 años de edad luego de lo cual no notaron ningún cambio cognitivo, actualmente informan que su desempeño cognitivo es igual al de siempre. De neurología lo remiten a esta evaluación.

En la evaluación neuropsicológica se encontró disfunción ejecutiva, sin embargo ésta puede corresponder al nivel de base del paciente y no se explica necesariamente por el antecedente de TEC. En esta evaluación no se evidencian otras alteraciones cognitivas”.

De igual manera, aparece otro dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional que le fue realizado al señor Jhon Enrique Zapata González por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 22 de enero de 2021, teniendo como patologías a calificar las de *“Estado de artrodesis, Fractura de otras vértebras cervicales especificadas, Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo”, determinando como pérdida de capacidad laboral el 35.70%, de origen común y con fecha de estructuración el “11/12/2015”, “Fecha del examen médico ocupacional de retiro para UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A., en que se registra la presencia de las patologías calificadas y se recomienda continuar en tratamiento por la Empresa Promotora de salud”.*

Analizando entonces tales probanzas junto con las demás obrantes al interior del plenario, se puede evidenciar que el demandante cuenta con diagnóstico inicial de crisis de ansiedad desde el año 1996, y que con el tiempo fue diagnosticado, entre otros, con trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, para lo cual le fueron formulados una serie de medicamentos que, como se evidencia de las historias clínicas, le han permitido tener una muy buena respuesta y una evolución adecuada con estabilidad clínica, documentos en su totalidad que le permiten advertir a esta Sala que el

demandante efectivamente cuenta con un antecedente patológico de salud mental; sin embargo, se hace necesario indicar que para activar la garantía de estabilidad laboral reforzada no resulta suficiente con demostrar la existencia de una afección de salud, por cuanto las personas pueden presentar una condición que no necesariamente implica que el trabajador cuente con una discapacidad, y que si bien en algún momento de la relación laboral pueden generar alguna incapacidad temporal, no implica que le sean aplicables las normas forales de la estabilidad laboral reforzada contenidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (Ver SL5700-2021).

Siendo lo anterior así, encuentra esta Corporación que el juez de instancia no desacertó en la valoración de los medios de prueba allegados al proceso al no encontrar demostrados los supuestos exigidos por la norma, pues pese a que el actor cuenta en su historial clínico con una afección psiquiátrica, se trata de una con un avance de dos décadas, con un tratamiento y manejo farmacológico que le ha permitido a éste mantener su condición por todo el tiempo, por cuanto no se evidencia que haya presentado siquiera una sola incapacidad que haya tenido que ver con dicha patología, a más de que para el momento de la terminación de manera unilateral del contrato de trabajo, no se evidencia ninguna restricción o recomendación médica que le impidiera desarrollar su labor de manera normal, y tampoco existe algún registro del que se desprenda de manera clara y categórica que su desempeño se viera afectado en razón de su patología mental, de donde resultaría contrario concluir algo distinto a lo decidido por el juez de instancia sin soporte médico o documental, y que si bien obran sendos dictámenes periciales que distan mucho uno de otro en factores esenciales como lo son el de la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, lo cierto es que los mismos fueron realizados con datas muy posteriores al de la terminación de la relación laboral, y que si bien determinan alguna discapacidad del trabajador, la misma no era de conocimiento del empleador para el momento en que le dio por terminado el contrato de trabajo, por más que

se le quiera dar un carácter retroactivo con la fecha de estructuración, de donde resulta lógico concluir con base en el material probatorio que es irrazonable colegir, como lo pretende la parte actora, que una enfermedad que se ha mantenido por más de dos décadas de manera controlada, se convierta en el motivo primigenio de la decisión de despido.

Y es que el apoderado recurrente señala en la sustentación de su recurso que el empleador conocía de la condición de su trabajador, lo cierto es que no se evidencia ninguna incapacidad frente a la patología mental sufrida por el actor, o alguna comunicación que al respecto haya sido recibida por el empleador, y que si bien la hermana al surtir su testimonio hace relación a que cuando el demandante estuvo internado en Samein, de la empresa llamaban a preguntar por él, no implica *per se* que tal condición presentada con mucha anterioridad se haya mantenido en el tiempo, por el contrario, las diferentes historias clínicas y reseñas de los diferentes psiquiatras que lo atendían, dan cuenta de la estabilidad médica del demandante para cumplir su rol laboral, y que incluso en el examen de egreso, contrario a lo señalado por el recurrente, el médico señala que el señor Zapata González no tenía ninguna restricción para el momento de la terminación de su contrato, ni alguna necesidad de consultar por presentarse un deterioro tal en la salud del trabajador que no le permitiera ejecutar su actividad de manera productiva de manera eficiente y que, al mismo tiempo, sugiriera que su labor productiva estaba siendo interferida o incompatible con su padecimiento, lo que implica que el accionante presentaba un estado de salud idóneo y suficiente para el ejercicio de las tareas que habitualmente desarrollaba en la demandada, pese a la persistencia por tanto tiempo de la enfermedad diagnosticada.

No puede perderse de vista que la patología sufrida por el señor Zapata González está enfocada en el suministro de varios medicamentos con los que precisamente se busca la regulación de los síntomas que lo aquejan, por lo que no puede considerarse una evidente condición de discapacidad objeto de protección constitucional que se depreca y, muchos menos, que

haya sido notoria a los ojos del empleador, por cuanto no se avizora ninguna comunicación formal al respecto, ni se le suministraron incapacidades por la patología mental, de donde no puede considerarse discriminatoria la terminación de la relación laboral de la que fue objeto el accionante por cuanto no quedó demostrado que la patología mental sufrida por éste, fuera impedimento para el desarrollo normal de las funciones que cumplía en la entidad demandada, dolencias que en sí mismas según lo probado, no tenían el alcance de perjudicar los intereses económicos o logísticos de la empresa, que impusieran de este lado presumir la conducta discriminatoria generadora del finiquito.

Así las cosas, debe decirse, a juicio de esta Sala, tal y como lo definió el *a quo*, que Jhon Enrique Zapata González no es beneficiario de la estabilidad ocupacional reforzada que pregona, al no existir nexo causal entre el estado de salud aducido y la decisión de despedirlo, lo que conlleva a que la decisión venida en apelación sea confirmada, incluido lo relativo a las costas. En esta instancia las mismas estarán a cargo de la parte demandante, fijándole como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.


DECISIÓN:

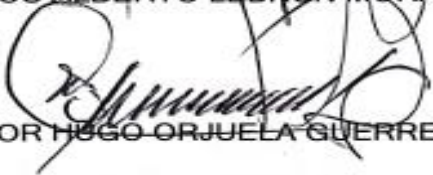
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia materia de apelación, incluido lo relativo a las costas.


Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501120170016301
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JHON ENRIQUE ZAPATA GONZALEZ
Demandado: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 20/04/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario